

# LA POLITICA DE ESTADOS UNIDOS EN CENTROAMERICA

Adolfo Aguilar Zinser

**ADOLFO AGUILAR ZINSER**

Máster en Administración Pública. Director del Departamento de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), Méjico.

## LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS EN CENTROAMÉRICA

**A**ntes que nada, quiero agradecer la invitación que me ha formulado la Universidad Nacional para participar en este Seminario, particularmente la Escuela de Relaciones Internacionales.

Como mejicano, creo que la iniciativa que ha presentado el gobierno de Luis Alberto Monge para lograr la neutralidad de Costa Rica en los conflictos armados centroamericanos, es un motivo de seria reflexión sobre las perspectivas de paz en Centroamérica; una reflexión que debe extenderse a los demás países del área como ampliación de esta vocación histórica de Costa Rica por la paz.

Creemos también que la situación en Centroamérica es tan extremadamente crítica y que sus características son tales, que se requiere, hoy más que nunca, la voluntad de los Estados respaldada por los pueblos, para oponerse a un proceso no sólo de guerra sino de limitación, de cercenamiento de la soberanía de los Estados centroamericanos. En esta perspectiva, es en la que debemos analizar la política de Estados Unidos en Centroamérica.

Es necesario hacer abstracción de consideraciones de tipo ideológico y apreciaciones sobre disparidades en los sistemas políticos y sociales para analizar sencillamente cuáles son las características que presenta la intervención de Estados Unidos; y deliberadamente le llamo intervención, porque nos encontramos frente a una serie de acontecimientos, de sucesos y de acciones que son francamente intervencionistas por parte de Estados Unidos. Simplemente tomemos en cuenta que los acontecimientos militares de los últimos años representan la más larga guerra que ha sufrido América Latina en este siglo en su territorio; representa también la más directa intervención de fuerzas militares norteamericanas en un conflicto regional, intervención que no se ha materializado aún en un envío de tropas de combate, pero que, sin embargo, se manifiesta en la transferencia de una gran cantidad de recursos militares, en la participación activa de asesores y, por supuesto, en la invasión de tropas norteamericanas a Granada.

En esta perspectiva, ¿cómo interpretar o cómo entender la política de la administración Reagan y del gobierno estadounidense? y ¿cuáles son las responsabilidades que nos corresponden a los latinoamericanos para enfrentar esta situación?

En primer lugar, la administración Reagan ha presentado el conflicto de una manera global, como una manifestación de la confrontación Este-Oeste. Cabría aquí preguntarnos si, realmente, ¿es éste el marco en el que Estados Unidos está actuando en Centroamérica?

Yo cuestiono el que Estados Unidos esté actuando con la lógica Este-Oeste. Y lo hago si en realidad estuviera actuando bajo esa lógica, sería teóricamente posible una negociación en Centroamérica; una negociación posible, precisamente a partir del establecimiento de ciertas condiciones que fuesen coincidentes con las exigencias o requerimientos que Estados Unidos plantea para su seguridad nacional, dentro del marco Este-Oeste.

El hecho es que no hay una negociación en Centroamérica, porque Estados Unidos no acepta, incluso, ni las premisas de su propia definición del problema como base para una negociación y no acepta el establecimiento de ningún mecanismo que garantice supuestas condiciones de seguridad nacional en la región. Las garantías que proporcionan los Estados, el aval y la participación de mediadores (como lo han sido los países del Grupo de Contadora en su conjunto e individualmente en distintas ocasiones), no han logrado una negociación en Centroamérica. Quiere decir esto, que la política de E.E. U.U. tiene una manifestación específica mucho más profunda, que se revela en acciones concretas.

Hay, desde mi punto de vista, dos dimensiones para interpretar la política de E.E. U.U. en Centroamérica: la primera es la dimensión de la acción y la segunda es la dimensión de las justificaciones.

La dimensión de la acción, obviamente corresponde a los acontecimientos, a los sucesos que E.E. U.U. está promoviendo dentro de la propia área centroamericana. La dimensión de las justificaciones corresponde a la discusión política del problema centroamericano al interior de Estados Unidos.

Respecto a la primera, a mí me parece que no es simplemente una hipótesis, sino que es una hipótesis comprobada por la realidad, pues el marco en que se desenvuelve la política de Estados Unidos para Centroamérica, es el de la recuperación absoluta de su hegemonía en la región centroamericana: Estados Unidos no está buscando una zona

de seguridad, está buscando una zona de hegemonía en Centroamérica.

En relación con la dimensión de las justificaciones, Estados Unidos esgrime el argumento del interés nacional, de la seguridad nacional, de los intereses vitales frente al pueblo norteamericano y frente al aparato político norteamericano, y lo hace con un extraordinario énfasis en la ideología anticomunista que ha caracterizado toda la actuación de Estados Unidos en América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. Con ello quiero decir que el anticomunismo, revivido una vez más como el punto central de la posición norteamericana, se vincula en el caso de Centroamérica, al llamado de los intereses nacionales y de la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta es la dimensión de las justificaciones; pero la dimensión de los hechos nos habla de una política que rebasa incluso estas justificaciones, para convertirse francamente en una política de hegemonía.

¿Cuál es, en las condiciones de crisis de la hegemonía norteamericana, el único instrumento que parece estar al alcance de ellas para recuperarla? El instrumento militar. Y esto no es casual, no es tampoco una idea peregrina de la administración Reagan, ni un afán estrictamente militarista de la administración Reagan; esto se desprende de la realidad misma de Centroamérica.

La ruptura de la legitimidad de los regímenes tradicionalmente aliados a Estados Unidos (los regímenes oligárquicos), la crisis económica de la región y la emergencia de los movimientos populares y revolucionarios en ésta, determina que sea esta misma realidad la que exija a Estados Unidos, como única posibilidad de recuperación de su hegemonía, el fortalecimiento de las estructuras militares y el uso de la fuerza como el último reducto para el establecimiento de su influencia en la zona. Esto es muy claro y tiene consecuencias políticas muy importantes para la región. Si la lógica es eminentemente militar, ello significará que el conflicto tendrá necesariamente que irse militarizando gradualmente en Centroamérica y que la política y la diplomacia tendrán también que girar en torno al espectro militar.

Yo quisiera, al respecto, recorrer muy rápidamente las grandes líneas de la actuación de Estados Unidos, para que así podamos identificar estos elementos.

Desde una perspectiva práctica, no necesariamente desde los planteamientos programáticos e ideológicos con los que llegó al poder la administración Reagan, sino desde el punto de vista práctico, el conflicto en El Salvador es el punto nodal del problema. El conflicto en El Salvador es el que ha generado toda la dinámica de esta intervención en Centroamérica y el que ha dado toda la lógica subyacente a esta intervención. En 1981, después del inicio de la llamada ofensiva general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la administración Reagan decide que la manera de evitar el triunfo militar de la guerrilla es sosteniendo el gobierno de El Salvador con una intensa ayuda y con la participación de asesores militares en la planeación de la campaña contrainsurgente. En esa ocasión el presidente Reagan le notificó al Congreso, al solicitar los fondos nece-

sarios para esta campaña, que sería una sola partida y que con una sola partida sería capaz de terminar con el problema de El Salvador. Ahí están los documentos, donde los voceros de la administración Reagan se comprometen a no solicitar una partida más de ayuda, porque consideran que con esa será suficiente. El Congreso de Estados Unidos con reticencia otorgó esta ayuda. Sin embargo, la campaña contrainsurgente fracasa, en el sentido más estricto de la palabra, puesto que no logra destruir al movimiento revolucionario. Se presenta, sin embargo, como un relativo éxito por el hecho de que logra sostener en el poder el gobierno de El Salvador; pero lo importante es entender que el objetivo de la administración Reagan no es sostener el gobierno de El Salvador, sino destruir a la guerrilla como posibilidad, como opción de cambio político en ese país.

Aquí comienza a manifestarse una lógica muy clara e implacable en las acciones de Estados Unidos a lo largo de estos últimos dos años. Lo primero que hacen, al darse cuenta que no es posible destruir el movimiento revolucionario simplemente con esa inyección de ayuda, es tomar dos decisiones fundamentales.

La primera es atribuirle a Nicaragua la razón de ser del movimiento revolucionario en El Salvador; esto es consistente con los planteamientos programáticos e ideológicos de la plataforma republicana. Sin embargo, se había tomado una decisión al principio de la administración Reagan: no lanzar una ofensiva contra Nicaragua, sino lanzar una ofensiva contra El Salvador. ¿En qué momento se materializa la ofensiva contra Nicaragua? En el momento del fracaso de la contrainsurgencia inicial en El Salvador. Entonces Estados Unidos decide abrir un nuevo flanco de confrontación, al considerar que la única manera de destruir el movimiento revolucionario es cortando los supuestos suministros de armas que enviaba el sandinismo al Frente Farabundo Martí.

La segunda es el reclutamiento de Honduras como contrincante en la lucha contrainsurgente. Esto tiene una doble manifestación de gran importancia inicial en el proceso. La primera es la decisión del gobierno de Estados Unidos de impulsar al ejército hondureño para que en combinación con el ejército salvadoreño despeje la zona de refugiados en la frontera de Honduras con El Salvador, por considerar que esa zona de refugiados servía de retaguardia al movimiento revolucionario. Esa tarea se cumple.

El segundo elemento sería la participación de Honduras ya directamente en el combate contra el Frente Nacional de Liberación; con ello se pensaba cercar a éste (el Frente Nacional de Liberación tenía sus principales frentes en la zona fronteriza con Honduras). Así el ejército hondureño junto con el salvadoreño, formarían las partes del movimiento de pinza, para destruir el movimiento revolucionario.

Por una serie de consideraciones que no mencionaré aquí, para no ocupar más tiempo, el ejército hondureño se retrae en cierta medida de su segundo papel, habiendo cumplido con el primero, y entonces Estados Unidos establece a Honduras como una retaguardia militar de la contrarrevolu-

ción mediante el extraordinario equipamiento militar y la instalación de bases.

Honduras entra aquí a jugar otro papel muy importante: pieza clave de la ofensiva norteamericana contra Nicaragua. Meses antes de que se manifestara abiertamente esta postura en Honduras, Estados Unidos había comenzado a entrenar a los contrarrevolucionarios somocistas en Miami, éstos son trasladados (e incluso esto está documentado por la prensa norteamericana) a bases en Honduras, donde ya existían otros sectores entrenados y auspiciados por el propio ejército hondureño. Ahí comienza a darse la ofensiva militar contra Nicaragua con base en Honduras, con el apoyo de Honduras y de su ejército.

Desde el punto de vista de la estrategia militar, ¿qué significa esto? Primero, significa la imposibilidad de destruir el movimiento revolucionario salvadoreño, que es un objetivo primordial de la administración Reagan. Segundo, conseguir que la ofensiva contra Nicaragua, incida sobre los acontecimientos en El Salvador.

Esto va generando una dinámica de reclutamiento o de intento de reclutar a todos los actores regionales, yo creo que éste es un aspecto medular de la política norteamericana, pues lo que se propone la administración Reagan es reclutar a cada uno de los Estados limítrofes del conflicto para objetivos de carácter político militar. Y esto significa, ni más ni menos, que Estados Unidos no reconoce, por principio, los espacios de soberanía de ninguno de los países de la región. Estados Unidos no reconoce la acción autónoma de ninguno de los países de la región.

Costa Rica, como Méjico (quizá como el único país miembro del Grupo Contadora que tiene frontera geográfica con el conflicto centroamericano), ha resistido extraordinarias presiones de Estados Unidos, con ello quiero decir que no somos ajenos al conflicto centroamericano. Méjico tiene en este momento en la frontera con Guatemala la más de cuarenta y cinco mil indígenas guatemaltecos asentados en campamentos de refugiados. Se calcula que otros cien mil más están dispersos por la zona de Chiapas. La zona de la frontera de Méjico con Guatemala, se puede considerar hoy (a pesar de que esto no es un hecho que aparezca públicamente en la prensa internacional, frecuentemente sí en la prensa norteamericana), una zona de guerra. También hay incursiones permanentes del ejército de Guatemala al territorio nacional, hay violaciones de la soberanía por parte de las autoridades guatemaltecas dentro del territorio mejicano.

Méjico es, entonces, parte integrante del conflicto. Por ello Estados Unidos pone una extraordinaria presión sobre Méjico para neutralizar su postura como un presupuesto sustancial de sus acciones en Centroamérica. Y no solamente desde el punto de vista político, a Estados Unidos le interesa menos la posición diplomática de Méjico, que su posición política sustancial en el conflicto centroamericano.

¿Cuál es la posición política sustancial? La ayuda y la asistencia a los refugiados, la movilidad de las organizacio-

nes de oposición centroamericana en el territorio nacional, la ayuda en petróleo a Nicaragua y el respaldo político a los movimientos de oposición centroamericana; ésta es una postura muy clara del gobierno de Méjico. Méjico reconoce la legitimidad de la reivindicación revolucionaria de los centroamericanos. Esto tiene una traducción política de implicaciones para la guerra y Estados Unidos conoce muy bien esta circunstancia. Podemos decir que Méjico está sujeto a tremendas presiones para que este cuadro se modifique.

Consideramos que el propósito de Estados Unidos es el reclutamiento, todos los países somos testigos de los esfuerzos que hace para reclutar la soberanía política de nuestros Estados en favor de su estrategia contrainsurgente, no en favor simplemente de una manifestación diplomática de estas posturas, sino en favor de una manifestación real, material, que insida sobre la correlación de fuerzas en el conflicto contrarrevolucionario.

Esto también ha tenido un especial efecto; la militarización de la política centroamericana, que se manifiesta en el hecho de que la dinámica de la intervención estadounidense hace necesario que la respuesta a ella tenga que ser cada vez más de carácter militar.

Lo está manifestando el caso de Nicaragua, pero también lo vemos extraordinariamente en el caso de El Salvador.

Por ejemplo, en el caso de El Salvador, en 1979 y 1980, había manifestaciones populares de trescientas mil personas en las calles de San Salvador, que es una proporción extraordinariamente alta de participación pacífica y pública en una manifestación de protesta. Hoy en día, no hay tales manifestaciones de protesta. ¿Quiere decir esto que el movimiento popular salvadoreño se haya extinguido? No, esto quiere decir simplemente que el movimiento popular salvadoreño ya no tiene oportunidad de efectuar tales manifestaciones.

En el caso de Honduras la militarización de la vida política significa que un precario equilibrio político de transición, que existía al momento de las elecciones que llevaron a la presidencia a Roberto Suazo Córdoba, se ha ido modificando sustancialmente en favor de los sectores militares más pro norteamericanos. Ello quiere decir, que los sectores democráticos de Honduras están siendo relegados, marginados de la vida política del país, lo cual abre las posibilidades de violencia en Honduras; como una posibilidad simplemente del ejercicio de la democracia; no hablemos de opciones revolucionarias radicales, sino sólo de la posibilidad del ejercicio de la democracia.

Se está planteando gradualmente en Honduras a través de la represión, a través de esta modificación sustancial de la correlación de fuerzas internas, manifestaciones violentas de resistencia. Esto es un fenómeno que tiende a extenderse a lo largo de toda Centroamérica. En la medida en que Estados Unidos sea capaz de reclutar la soberanía de los Estados centroamericanos para su estrategia, en la medida en que Estados Unidos sea capaz de alterar la correlación de

fuerzas políticas internas en cada uno de estos países, el conflicto habrá de manifestarse de manera mucho más violenta, porque la base del conflicto es social, no es ni ideológica, ni meramente de influencias externas; es un problema social en Centroamérica.

A partir de esto podríamos decir, también, que la diplomacia se militariza o que la diplomacia gira en torno a consideraciones de tipo militar.

Durante toda la primera fase de la actuación del Grupo Contadora fue evidente que el planteamiento que hacía implícitamente estaba dirigido a Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos debería acceder a una negociación. ¿En qué términos? Precisamente en aquellos en que los países miembros del Grupo Contadora, potencias, países con gran influencia regional, tendrían la capacidad de garantizarle a Estados Unidos en una mediación, condiciones para su seguridad nacional a cambio de que Estados Unidos aceptase ciertas transformaciones en las estructuras políticas y sociales que eran necesarias e inevitables. Este planteamiento de Contadora tiene un gran respaldo internacional y, al tenerlo, se convierte en una demanda internacional a Estados Unidos para que éste acceda a la negociación en Centroamérica.

Estados Unidos, sin embargo, no lo hace, mantiene una postura muy hostil a Contadora. Intenta por todos los medios que el asunto de Contadora no cuaje y, más bien, pretende que la discusión del problema centroamericano sea llevado a la OEA. Obviamente el propósito es la sanción a Nicaragua y no la negociación. En ese sentido, esta primera fase de Contadora concluye desafortunadamente en la conferencia del Presidente de Méjico en Cancún.

¿Por qué?, porque el día siguiente, exactamente el día siguiente de que concluye la Reunión de Presidentes en Cancún, Estados Unidos comienza sus ejercicios militares en la zona centroamericana enviando su flota, poniendo una presencia muy importante de su flota intimidatoria a Centroamérica. A partir de entonces, se modifica la relación diplomática de planteamiento negociador. A partir de entonces, es Estados Unidos quien plantea las negociaciones en Centroamérica. Pero, ¿qué negociación plantea? Plantea la negociación, que significa la capitulación de las fuerzas revolucionarias en El Salvador, plantea la capitulación de Nicaragua en su planteamiento de gobierno.

Estados Unidos a partir de entonces, envía al representante Ríchar Stone a negociar con la guerrilla salvadoreña. Ríchar Stone habla incluso de negociar con la guerrilla guatemalteca en su visita a Guatemala y fuera de Contadora. Estados Unidos dice: Ahora sí negociamos, y ahora sí negociamos incluso de cara a los países del Grupo Contadora. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos negociando con los cañones en la puerta de la casa, ahora sí, todos los países tendrán que aceptar nuestros términos de negociación, no los términos que nos plantea el Grupo de Contadora.

La dinámica ha seguido en este mismo contexto, es

una negociación como las que sabe hacer el señor Kíssinger: la negociación con los cañones en la puerta de la casa.

Pasando al segundo aspecto, la dimensión justificatoria, podemos verla a partir de entender cuál es la diferencia real, la diferencia práctica entre la postura de la administración Cárter y la postura de la administración Reagan respecto de Centroamérica.

La administración Cárter enfrenta a la revolución nicaragüense con un planteamiento negociador, ¿basado en qué diagnóstico? Considera que el conflicto de Nicaragua debe de verse en el contexto de la confrontación Este-Oeste, en esto coincide con la administración Reagan, pero considera que la dictadura está agotada en Nicaragua y que no es posible sostener la dictadura y evitar el triunfo del movimiento revolucionario armado en Nicaragua. Se quiere evitar que el movimiento sandinista tenga una posición hegemónica en la reestructuración del poder interno, entonces, la administración Cárter decide que la manera de lograr este objetivo, es negociando, para incluir en la negociación un amplio sector de la oposición evitando que los sandinistas la hegemonizaran.

Aquí, quisiera señalar un aspecto muy importante, quizás uno de los factores claves para el fracaso de esta negociación. Méjico se opuso a participar en cualquier plática negociadora y auspiciar cualquier idea de negociación en el caso de Nicaragua. Méjico consideraba que las fuerzas sociales que se estaban manifestando en Nicaragua eran lo suficientemente claras. La negociación, que proponía la administración Cárter, era una negociación intervencionista, para incidir e interferir en el proceso de autodeterminación histórica que se estaba dando en ese país. La negociación no se da en Nicaragua. Se celebran reuniones de mediación con la participación de otros países, pero no se consuma la negociación en Nicaragua y triunfa el movimiento sandinista.

¿Qué es lo que la administración Reagan plantea como alternativa de política? ¿Qué se desprende de la experiencia de Nicaragua, de la experiencia de Cárter en Nicaragua?

La administración Reagan dice: nosotros no podemos plantear la negociación; en primer lugar, porque la negociación fracasó en Nicaragua; en segundo lugar, porque la negociación le dio legitimidad internacional al movimiento sandinista, el cual quisimos evitar que llegara al poder. Para lograr el triunfo no hay otra vía que sostener intacto, lo más posible, al gobierno de El Salvador, evitando a toda costa que la guerrilla avance.

Aquí es donde se da la vertiente militar a la que me he referido en la primera parte de mi exposición. A partir de esto, también se da la vertiente de justificación política al interior de Estados Unidos.

¿En qué se manifiesta? En plantearle a los norteamericanos el conflicto de El Salvador, como un conflicto relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos en el marco de la confrontación Este-Oeste.

¿Qué plantean los demócratas frente a esta interpretación al inicio de la intervención militar estadounidense en El Salvador? Plantean que si bien tales premisas pueden tener ingredientes de verdad, son debatibles. Los demócratas y liberales plantean que es necesario, como fórmula para evitar el triunfo de la guerrilla o para matizar las posibilidades de hegemonía del movimiento guerrillero salvadoreño en la conformación de un nuevo gobierno, transformaciones políticas y sociales.

Comienza, entonces, toda la presión en el Congreso para que la ayuda sea de carácter económico, condicionada a la realización de la reforma. La administración Reagan comienza a pugnar porque la ayuda sea de carácter eminentemente militar y que las reformas estén condicionadas a las alianzas políticas internas en El Salvador.

La administración Reagan logra al fin y al cabo condicionar la política y el debate político en Estados Unidos a las consideraciones de seguridad nacional de Estados Unidos. No por convencimiento, sino incluso, por disuasión política, porque las condiciones del debate político interno hacen imposible que los demócratas puedan cuestionar la premisa de la seguridad nacional, sin asumir con ello serios riesgos políticos en sus propias reelecciones o en su propio juego de alianzas al interior del aparato gubernamental norteamericano.

Entonces vemos cómo la administración Reagan utiliza un instrumento que prueba ser extraordinariamente efectivo en el debate político interno, y es la campaña contra Nicaragua. En el caso de El Salvador, Estados Unidos tiene una contracampaña muy fuerte para caracterizar el problema en términos Este-Oeste y de seguridad nacional. Todos los liberales del Congreso, y la prensa norteamericana están haciendo énfasis en dos aspectos de la cuestión salvadoreña: derechos humanos y negociación.

La administración Reagan, que tiene que hacerle frente a esta extraordinaria ofensiva en favor del respeto a los derechos humanos y a las negociaciones en El Salvador, decide enfocar toda su campaña propagandista contra Nicaragua. Comienza toda la lucha propagandista contra Nicaragua, donde hay menos resistencia de la prensa y de la opinión pública estadounidense e incluso del Congreso. Se califica a Nicaragua de país totalitario, se le acusa de desviarse de los planteamientos hechos en 1979, y empieza una campaña muy intensa en la prensa norteamericana contra Nicaragua. Comienza a tenderse trampas, utilizan, incluso, algunos de los ingredientes de inexperiencia política del liderazgo sandinista, y con una gran habilidad se logra, en el transcurso de unos meses, presentar a Nicaragua como el ejemplo de lo que debía ser la visión interna en Estados Unidos del problema centroamericano.

El desprestigio al sandinismo viene a condicionar el debate político interno en Estados Unidos. Recordemos que en 1979-1980 los sandinistas tenían en el Congreso de Estados Unidos gran respaldo y un gran apoyo del sector liberal-demócrata. Hoy en día prácticamente lo han perdido. Cuando los sandinistas tenían este apoyo, el Frente Fara-

bundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Democrático Revolucionario tenían en el Congreso una posición desahogada y de bastante respaldo. Este respaldo se demuestra simplemente, en las propuestas de negociación que había en el Congreso de Estados Unidos hace dos años para El Salvador; las propuestas de negociación se basaban en la idea de que la oposición salvadoreña debería de participar en la configuración de un nuevo gobierno que convocase a elecciones. Hoy en día, todas las propuestas de negociación que emanan del Congreso excluyen por principio esta posibilidad, es decir, las negociaciones se circunscriben únicamente a otorgar determinadas garantías para que la oposición salvadoreña entre a configurar, sin ningún nuevo esquema de gobierno, en la transición a las elecciones. Esto quiere decir que en el argumento que logra establecer la administración Reagan, dentro del debate político nadie va asumir los riesgos de apoyar una negociación o de apoyar la reivindicación de los movimientos revolucionarios que no han triunfado aún en Centroamérica, tanto en El Salvador como en Guatemala, ya que el punto de referencia, bajo el cual se les quiere comparar, es el desprestigio que ha sufrido el liderazgo sandinista en el aparato político norteamericano.

¿En qué converge todo esto?

El debate político interno en Estados Unidos puede llegar a un extremo aberrante, y esto es el apoyo a los contrarrevolucionarios nicaragüenses, un apoyo abierto del gobierno de Estados Unidos y del Congreso de Estados Unidos.

En noviembre de 1982 el Congreso votó unánimemente para pedirle al Presidente la suspensión de la ayuda encubierta de la CIA a los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Se argumentó en el Congreso, que era violatorio del derecho internacional y violatorio de la Constitución el intento de derrocar un gobierno.

La justificación que daba la administración Reagan para bloquear el paso de armas de Nicaragua a El Salvador, se había agotado, ése no era realmente el objetivo. En dos votaciones que han sucedido este año, se ha perdido, es decir, se ha vuelto a prohibir la ayuda a los contrarrevolucionarios, pero no ya de manera unánime, sino que ahora de manera muy apretada, es decir, ahora más de 120 diputados del Congreso de Estados Unidos y la mayoría de los senadores consideran que es legal el derrocamiento de un gobierno, esto en contra de la Constitución de Estados Unidos, de todos los compromisos internacionales hechos por Estados Unidos y del derecho internacional; esto simplemente demuestra, el nivel al que ha llegado el debate interno en Estados Unidos.

Finalmente, y con esto termino, para interpretar la perspectiva inmediata de este debate, tenemos que darnos cuenta que ha habido una transformación, un condicionamiento a las posturas de los demócratas y liberales en Estados Unidos, respecto del síndrome o su visión de la seguridad nacional. También hay otro aspecto muy importante que quedó de manifiesto con la invasión a Granada; durante mucho tiempo la discusión en torno a la intervención direc-

ta de Estados Unidos en Centroamérica, se había hecho bajo el espectro de Vietnam.

¿Cuáles eran los planteamientos?

Tanto en el debate sobre la guerra convencional dentro del Pentágono, como sobre el pacifismo en la opinión pública, el presupuesto militar había tenido como punto de referencia la experiencia de Vietnam. Hoy la experiencia de Vietnam, después de Granada, ha quedado atrás, porque se consuma un hecho histórico muy importante y es que en Granada se da el puente, se vincula el puente histórico entre Vietnam e Irak, y la opinión pública norteamericana y los políticos norteamericanos ya no ven el asunto de Centroamérica necesariamente bajo el espectro de Vietnam, sino ahora bajo el espectro de Irak y del Medio Oriente.

¿En qué se manifiesta esto? ¿En qué cambia la correlación en el debate político? Cambia en que lo que está en cuestionamiento ahora no es simplemente una guerra contrainsurgente costosa para Estados Unidos en un país del Tercer Mundo, sino están en cuestionamiento dos hechos, dos criterios fundamentales: la efectividad del liderazgo político norteamericano y la efectividad de sus acciones. Granada consume la emergencia de estos dos conceptos. ¿Por qué? Ustedes recuerden que la invasión a Granada se da 48 horas después del bombarzo en Beirut, en donde la reacción de los norteamericanos fue de una humillación extraordinaria, la opinión pública tuvo una reacción en contra del presidente Reagan extremadamente fuerte, incluso el propio Kissinger atacó duramente al Presidente en la televisión.

El presidente Reagan demuestra su capacidad de liderazgo frente al aparato político enviando tropas a Granada y además demuestra que es efectiva esa operación, que la invasión a Granada, a pesar de sus costos, se consuma.

En estos momentos, los tres aspectos principales a tomar en cuenta en el debate político interno de Estados Unidos para juzgar si habrá o no, o bajo qué condiciones se dará una intervención militar directa en el conflicto centroamericano son:

1. La justificación. ¿Cuál será la justificación? Esta puede ser simplemente, sostener su política a través de una intervención militar en Centroamérica, si los acontecimientos continúan avanzando bajo su propia lógica militar.
2. Los acontecimientos que la situación en el Medio Oriente y en Granada han generado al presidente Reagan respecto de su capacidad de liderazgo. Si los acontecimientos en Centroamérica exigen que el Presidente demuestre una vez más su capacidad de liderazgo, lo tendrá que hacer, o si él decide hacerlo utilizándolo para el proceso electoral, en la perspectiva de su reelección.
3. El aspecto más crítico, y donde seguramente hay un intenso debate al interior del gobierno estadounidense, es la efectividad de la intervención. ¿Es efectiva la intervención? ¿Se conseguirán los objetivos militares deseados enviando tropas a Centroamérica?

Esta es la gran pregunta que gira en torno a Washington y esa es la pregunta cuya resolución será determinante para las acciones de Estados Unidos en los próximos meses en Centroamérica.

Diría simplemente, para concluir, que si en algo no hay que confiar, es en la capacidad de análisis de Estados Unidos, ni siquiera en su capacidad de información y de inteligencia. Estados Unidos se ha equivocado sistemáticamente en todas las partes del mundo donde ha intervenido. Se ha equivocado en nuestros países, porque si hubiera tenido una apreciación exacta de los acontecimientos en Centroamérica su política hubiera sido otra desde hace tres años.

Estados Unidos se ha equivocado en el análisis, y por ello no debemos confiar que éste, en el sentido que una intervención de tropas en Centroamérica, no dará los resultados militares que ellos esperan.

FRANCISCO ROMÁN ARAVENA

Máster en Ciencias Políticas, Coordinador del Doctorado de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, Costa Rica.